

LOS SAQUEOS EN ARGENTINA EN DICIEMBRE DE 2001

a la luz de la teoría de la acción colectiva*

Pia V. Rius

El trabajo de Javier Auyero, *La zona gris. Violencia colectiva y política partidaria en la Argentina contemporánea*, contribuye a echar luz sobre ciertas dimensiones clandestinas de la política partidaria y sus efectos en episodios de violencia colectiva como lo fueron los saqueos de alimentos en el gran Buenos Aires, en diciembre de 2001. El autor despliega un conjunto de recursos que le permiten documentar los *mecanismos* que desencadenaron los saqueos y las formas que éstos adquirieron en las localidades de Moreno y La Matanza.

Los mediadores serán operadores clave a la hora de generar las oportunidades propicias a los saqueos: los relatos que el autor nos propone señalan invitaciones explícitas a saquear un supermercado local a través de volantes, citando a los vecinos en el lugar y a la hora señalada. Otras invitaciones son más veladas como la realización de una marcha por el centro comercial de la localidad de Moreno por las propias autoridades a cuyo paso se desencadenaría un episodio

de saqueos que tendría por víctimas a los comerciantes locales.

Auyero argumenta a partir del enfoque de la teoría de la acción colectiva que las movilizaciones se producen por un conjunto de oportunidades coyunturales acentuando la continuidad entre la política cotidiana y las formas de protesta violenta. En este sentido, precisa que los saqueos están en continuidad con la política ordinaria y no se pueden explicar como momentos de suspensión de la vigilancia y de la represión rutinarias de los individuos o grupos de individuos. A través de relatos, de notas de terreno, artículos periodísticos, testimonios televisivos, reportes de corresponsales extranjeros, mapas y cuadros, muestra una de las formas que adquiere la política territorial en los barrios populares: el acaparamiento de recursos estatales por parte de los *punteros* y los dirigentes políticos (principalmente se refiere al Partido Justicialista). El autor muestra que estas prácticas sobrepasan el ámbito específico de la distribución de alimentos y alcanzan a otros sectores. El ejemplo de una directora de escuela posicionada como cliente y especulando sobre la forma en que una campaña electoral puede influir en el acceso a recursos del

* Javier Auyero, *La zona gris. Violencia colectiva y política partidaria en la Argentina contemporánea*, 2007, Siglo XXI Editores, 234 p. ISBN 978-987-1220-94-6.

Estado por parte de su escuela ilustra su extensión.

El primer capítulo de la obra examina la existencia de lo que Auyero denomina una zona gris en la política cotidiana. Inspirado de la descripción de Primo Levi (1988) del arribo al campo de concentración, el concepto de zona gris se refiere a una zona de frontera, que no puede reducirse a una línea en la que se enfrentan dos actores enemigos si no que abarca un espacio complejo en el cual cohabitan quienes, en la percepción del recién llegado, deberían estar enfrentados. El autor cita abundantemente los estudios que, ciertamente más frecuentes en los países periféricos, mencionan la existencia de una zona gris en el funcionamiento de la política cotidiana en distintas partes del mundo incluidos los países desarrollados. De este modo descarta que la misma sea una característica exclusiva de América Latina. En ella no se pueden establecer con claridad las fronteras de la institucionalidad. Se trata de zonas operadas por figuras híbridas. La figura híbrida del prisionero-funcionario de Levi daría lugar a otras en la política cotidiana como la de vecino-saqueador, policía-saqueador, ladrón-protector o intendente-promotor de saqueos. En estos binomios el segundo componente del mismo señala la actividad inesperada que erosiona el sentido del primero y produce perplejidad al observador y al recién llegado. El trabajo que propone Auyero sobre la zona gris

en la Argentina contemporánea sitúa con precisión el accionar de esas figuras híbridas y su rol mayor en los saqueos ocurridos en diciembre de 2001 en el Gran Buenos Aires, así como algunas de sus consecuencias en la política cotidiana. Así, en el capítulo segundo constata el acaparamiento de los recursos por parte de los *punteros* o mediadores barriales que intentan posicionarse como los únicos proveedores de los bienes públicos. No carentes de luchas y faccionalismos es decir en posiciones desafiadas y reafirmadas, el mediador niega su influencia, “invita” a los clientes –no los obliga– a asistir a actos políticos, hace favores –que podrían no ser retribuidos– a la vez que produce una “reciprocidad difusa y de largo alcance”.

Los mapas de los saqueos analizados en el tercer capítulo permiten disociar la presencia de saqueos y condiciones de pobreza ya que en muchos de los distritos más pobres del país no se producen saqueos. Para ello el autor precisa que los cortes de rutas, concentraciones o marchas y los saqueos son formas distintas de acción colectiva con actores y dinámicas diferentes. La realización de los mapas a partir de fuentes periodísticas se vincula con las hipótesis sobre la presencia policial y de los *punteros* en la zona del saqueo. A su vez, otras organizaciones presentes en episodios de pedidos de alimentos, específicamente de “trabajadores desocupados”, aparecerían como capaces de canalizar la emer-

gencia alimentaria y evitar los saqueos. Los mapas y el corpus de datos periodísticos corresponden a los saqueos ocurridos en el territorio nacional. A partir de esas fuentes secundarias el autor ofrece una primera descripción en la que los policías reprimen o negocian con los dueños de supermercados para distribuir alimentos y evitar los saqueos aunque en ocasiones las negociaciones son interrumpidas por incidentes que “crean la oportunidad” para producir un saqueo. Las policías provinciales aparecen como relativamente efectivas a la hora de disuadir a las multitudes sobre la realización de un saqueo. En contraste con los saqueos en el Gran Buenos Aires donde éstos parecen posibles en la medida en que existen “conexiones verticales” entre policías y saqueadores que son poco relevados en los informes periodísticos.

En el cuarto capítulo el análisis de los saqueos ocurridos en las localidades de Moreno y La Matanza identifica *mecanismos* como la “señalización mutua” entre saqueadores, los “rumores” que circulaban abundantemente advirtiendo e invitando al saqueo, la “espiral de señales” de promoción o facilitación del saqueo como el abandono de una guardia policial a la hora en que los mismos se producen o el protagonismo que adquieren las fuerzas del orden como saqueadoras. Sin embargo, resulta difícil evaluar evidencias que a veces son contradictorias. Los testimonios populares que señalan a los punteros en la

organización directa de los saqueos como por ejemplo mediante el reclutamiento de los primeros saqueadores que —a cambio de dinero— irrumpen en los negocios es opuesta a las “versiones oficiales” del Peronismo que señalan que los punteros estaban ahí porque viven ahí o “para calmar las cosas” dejando su rol de manera indeterminada. Este interrogante revela ciertas limitaciones que la yuxtaposición de relatos no alcanza a resolver cuando éstos son opuestos. Esas dificultades aparecen también en el análisis del accionar de las fuerzas policiales. La policía resulta ser una fuerza eficaz, en la medida en que su presencia tiene un rol disuasivo —ya sea sobre los primeros saqueadores, que irrumpen en los locales comerciales no vigilados o en los vecinos-saqueadores que se suman cuando “otros están saqueando” sorteando las calles con presencia policial. Sin embargo la policía aparece como inoperante; en este sentido, Juan José Álvarez, entonces Secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, *explica* que la policía de la provincia de Buenos Aires “no entiende de matices”.

Finalmente, el quinto capítulo aborda las experiencias de los participantes para ocuparse del aprovechamiento de las oportunidades ofrecidas para saquear a partir de la justificación. Sin embargo el autor sostiene que los saqueadores no se presentan como tales de manera retrospectiva; esta relación no es explicitada acabadamente por el autor. En efecto, la sección sugiere algunos elementos de lo

que parece ser una moral binaria que distingue el “buen saqueador” –que recurre a la violencia por hambre– del “saqueador ladrón” –que roba electrodomésticos u otros bienes valiosos. Por otra parte, los saqueadores estarían de acuerdo con los saqueados, en tanto reprueban los actos y derivan la responsabilidad de los mismos hacia la política. Estas justificaciones parecieran relevar una forma de suspensión de la vigilancia y de la represión rutinarias pero el autor no clarifica esta posible ruptura sino que subraya la continuidad existente a través del funcionamiento de rutinas. Así, los *mecanismos* que desencadenan saqueos y los *sentidos* que éstos adquieren quedan yuxtapuestos invitando al lector a articular distintas perspectivas de análisis.

Además de los *mecanismos* específicos que dan lugar a los saqueos Auyero sugiere que éstos se desarrollan en el marco de una zona gris. Sin embargo, no queda

claro si la utilización de esta metáfora refiere a la dificultad de observación de prácticas ilegales o bien a la percepción del recién llegado (en el caso de Primo Levi), del observador externo o el extranjero quien una vez familiarizado con ellas comprende con claridad el funcionamiento de la política –y de la policía– entre los sectores más vulnerables donde parecería que la normalidad no siempre contradice la ilegalidad. El libro contribuye ciertamente a comprender las relaciones clandestinas que articulan la violencia y la política en la Argentina contemporánea; constituye un documentado estudio de los saqueos ocurridos en diciembre de 2001 que se detiene sobre dinámicas a menudo olvidadas por las ciencias sociales como los rumores o las complejas relaciones existentes entre los saqueos y las fuerzas policiales presentando un fecundo campo de interrogantes que merecen ser analizadas.